

EL DEBATE EN TORNO A LA PROPUESTA DE REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO

Ponencia preparada para el XXXIV Congreso Internacional de Estudios Electorales:
Representatividad y legitimidad en la construcción democrática. Del 17 al 20 de octubre de
2023, Tijuana, Baja California

Jorge Gerardo Flores Díaz¹

Introducción

En México, a finales de la década de los setenta del siglo pasado los partidos políticos comienzan a recibir financiamiento público directo. Sin embargo, es en la década de los noventa cuando éste adquiere una relevancia mayúscula, al establecerse en la constitución que en las finanzas de estas organizaciones los recursos de origen público deben prevalecer sobre los de origen privado. Así, desde entonces los partidos políticos en México se financian básicamente con dinero proveniente del Estado.

Este esquema de financiamiento, diseñado en el contexto de transición a la democracia, coadyuvó a la fortaleza de los partidos de oposición, lo que a su vez condujo al aumento de la competitividad electoral y a la alternancia política en los distintos niveles de gobierno. Y si bien se han aprobado algunas reformas —en 2007 se aprobó una nueva fórmula para calcular los montos totales y en 2014 se homogeneizó a nivel federal y en los estados— su lógica fundamental ha permanecido intacta.

No obstante y a pesar utilidad que ha mostrado, diversos actores han impulsado una drástica reducción de los montos entregados a los partidos, señalando, entre otras cosas, que produce un distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía, y que reducirlo abonaría a la recuperación de la legitimidad de los partidos, además de permitir el ahorro de importantes recursos.

En este contexto destaca el caso del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el cual desde 2018, año en que gana la presidencia de la República, ha

¹ Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Investigador Nacional nivel 1 (CONAHCYT). Y profesor en la Universidad de Quintana Roo. Correo: jorge.flores@uqroo.edu.mx

impulsado en diversas ocasiones una reforma constitucional para reducir sensiblemente el financiamiento público de los partidos políticos.

En este trabajo se examinan los argumentos a favor y en contra de reducir drásticamente el financiamiento público de los partidos en México y se retoman algunos ejemplos internacionales en los que se ha llevado a cabo una reforma en este sentido para extraer las lecciones pertinentes.

En el primer apartado se describe la evolución histórica del esquema de financiamiento público de los partidos políticos en el contexto de transición a la democracia México. En el segundo se examinan las reformas al modelo en el contexto democrático mexicano. En el tercero se abordan los intentos del partido MORENA por modificar la fórmula de financiamiento público de los partidos. En el cuarto se analizan los argumentos en el debate sobre la reducción financiamiento público de los partidos. En el quinto se estudian algunos ejemplos a nivel internacional en los que se ha llevado a cabo esta reforma. Y finalmente se presentan algunas conclusiones.

El financiamiento público de los partidos durante la transición a la democracia

Durante la mayor parte del siglo XX el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hegemonizó el poder, padeciendo, la oposición política, la exclusión y represión del régimen, además de la falta de recursos financieros. Dado el control que mantuvo del aparato gubernamental, el PRI pudo echar mano de los recursos del Estado, mientras que los partidos de oposición se financiaban exclusivamente con raquíuticos recursos propios. En este contexto, el interés por mantener en funcionamiento el sistema electoral llevó a la aprobación de prerrogativas para la oposición. En 1963 surge el primer sistema de financiamiento público (indirecto) para los partidos políticos, consistente en exentarlos del pago de diversos impuestos. El objetivo fue apoyar la supervivencia de los partidos de oposición para poder mantener la fachada democrática.

A finales de los 60 y principios de los 70, sin embargo, la ineffectividad de la estrategia gubernamental comenzó a ser cada vez más evidente. Aumentaron las muestras de descontento con el sistema y también aumentó la represión política –la matanza de Tlatelolco (1968) y el jueves de corpus (1971) fueron los eventos paradigmáticos–. Ante este panorama,

el gobierno intentó evitar la escalada de inestabilidad, otorgando diversas concesiones. Se puso en libertad a los presos políticos, se eliminó el delito de disolución social y aumentó el presupuesto para educación superior (Zermeño, 2010: 63-67). Al mismo tiempo, aumentaron las prerrogativas para apoyar la participación institucional de los partidos de oposición. Se les otorgaron a) franquicias postales y telegráficas y b) acceso a radio y televisión durante las campañas electorales (artículo 39, Ley Federal Electoral, 1973).

La estrategia del “Látigo y Zanahoria” (represión más concesiones limitadas y focalizadas), empero, mostró sus limitaciones a mediados de los setenta. En la elección presidencial de 1976 el Partido Acción Nacional (PAN), partido de oposición histórico, no presentó candidato, por lo que José López Portillo (candidato del PRI) no tuvo adversario. Este hecho desmoronó la fachada democrática del sistema y dejó solo la vía extrainstitucional –marchas, plantones, boicots, e incluso medios violentos (grupos guerrilleros rurales y urbanos)– para la expresión del descontento.

En gobierno respondió con una reforma política de gran calado, cambiando la estrategia del “Látigo y Zanahoria” por la (limitada) apertura democrática (liberalización). La reforma aprobada en 1977 constitucionalizó la figura de los partidos políticos como “entidades de interés público” y amplió significativamente sus derechos. Tendrían desde entonces acceso permanente a los medios de comunicación social y se dispuso que durante los procesos electorales “deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular”, lo que se tradujo en la entrega, por primera vez en la historia, de financiamiento público directo. Sumado a esto, se señaló que contarían con medios para sus tareas editoriales, un mínimo de carteles y folletos, un local para celebrar reuniones públicas electorales en las cabeceras de los distritos uninominales y apoyo en la realización de recorridos electorales (artículo 41 constitucional y 48 y 49 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, LFOPPE). Asimismo, se flexibilizaron los requisitos para el reconocimiento legal de nuevos partidos políticos y se ampliaron los espacios de representación con la introducción de la representación proporcional en la Cámara de diputados. El objetivo fue integrar a la oposición en el sistema institucional, para evitar el regreso del “México bronco y violento”. La reforma de 1977 desencadenó la “transición a la democracia”. Fue el inicio de una serie de reformas sobre diversos aspectos del sistema electoral que en las décadas subsecuentes

desembocaron en la creación de un andamiaje institucional electoral confiable, gracias al cual es el voto de los ciudadanos el que determina a los ganadores y los partidos compiten en un contexto de libertad (Becerra, et. al. 2005).

En materia de financiamiento de partidos políticos la legislación creció sobremanera, abarcando un amplio cumulo de aspectos. En 1986 se establecieron las primeras reglas para calcular el monto de financiamiento público que los partidos tendrían derecho a recibir. En 1990 se precisaron cuatro rubros: 1) por actividad electoral, 2) por actividades generales como entidades de interés público, 3) por subrogación del Estado de las contribuciones de legisladores y 4) por actividades específicas como entidades de interés público. Y en 1993 se reguló por primera vez el financiamiento privado, dividido en: financiamiento proveniente de la militancia, financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, además se estipuló que los partidos debían presentar ante la autoridad electoral administrativa informes anuales y de campaña.

La reforma de 1996, por su parte, marcó un parteaguas en el modelo de financiamiento de los partidos políticos. Este año se estableció a nivel constitucional que en el gasto partidista los recursos de origen público deben prevalecer sobre los privados. Asimismo, se cambió la fórmula para calcular el monto total a distribuir, aumentando drásticamente los recursos en manos de los partidos –cinco veces lo gastado en la elección de 1994 (Brinegar, et. al., 2006: 81)–; y su distribución siguió criterios equitativos: 30% de forma igualitaria y 70% según la votación obtenida por cada partido en la elección inmediata anterior para la cámara de diputados (artículo 41, Constitución Federal). Sumado a esto, la reforma de 1996 estableció por primera vez desde la constitución política federal los principios que deben estar garantizados en las constituciones de los estados. En materia de financiamiento de partidos políticos se precisó que, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias, los partidos políticos deben recibir, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y, durante los procesos electorales, apoyos para las actividades tendientes a la obtención del voto. Además, se señaló que deben propiciarse condiciones de equidad para el acceso a los medios de comunicación social y establecerse límites a las erogaciones, montos máximos para los aportes de simpatizantes, procedimientos para el control y vigilancia de sus recursos y sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones (artículo 116).

Vale la pena destacar que la reforma de 1996 incluyó otros cambios sumamente relevantes, como la autonomía constitucional del órgano electoral administrativo (Instituto Federal Electoral, IFE), la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como parte del poder judicial del Estado, la elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (Becerra, et. al. 1997)

Las nuevas condiciones del proceso electoral permitieron el aumento de alternancias políticas en diferentes niveles de gobierno. A nivel local, en 1994 solo el 15.3% de la población estaba gobernada por un partido de oposición, no obstante, en 1999 el 45.4% ya se encontraba en esta situación (Peschard, 2008: 43). Por su parte, a nivel federal la oposición logró arrebatarse al PRI la mayoría absoluta en la Cámara de diputados en 1997 y la presidencia de la República en el año 2000.

Sin embargo, a pesar de los innegables avances en sentido democrático registrados durante el último cuarto del siglo pasado y del resultante (y novedoso) contexto de pluralidad política, la discusión y reforma de las reglas del juego electoral se ha mantenido como una constante, en particular en lo relacionado con el financiamiento de los partidos políticos.

Reformas al modelo de financiamiento de los partidos políticos en la democracia mexicana

Como se señaló, la reforma aprobada en 1996 aumentó drásticamente los recursos públicos entregados a los partidos políticos y generó un reparto más equitativo. No obstante, para su cálculo consideraba, entre otros factores, el número de partidos con representación en el Congreso, generándose cambios abruptos y desproporcionados en los montos totales. Así por ejemplo, en 2001 el financiamiento público partidista aumentó más del 40% gracias al registro de tres nuevos partidos políticos, y en 2004 disminuyó en un 26% con la pérdida de registro de dos partidos políticos (Murayama, 2008: 268). Es por ello que, en 2007 se reformó la fórmula. El monto total sería desde entonces el resultado de multiplicar el padrón electoral por el 65% del salario mínimo (a partir de 2016 de la Unidad de Medida y Actualización, UMA). Por otro lado, en consideración de que la mayor parte del gasto durante las campañas electorales se destinaba a comprar tiempo en medios –en la elección de 2006, por ejemplo,

el gasto en medios de todos los partidos fue en promedio del 95% de sus recursos públicos para campaña (Murayama, 2008: 282)—, con esta reforma aumentó el tiempo gratuito en radio y televisión para los partidos políticos, quedando el IFE como autoridad única encargada de administrar estos tiempos a nivel federal y estatal, y se prohibió que los partidos compren espacios.

Ahora bien, desde 2007 los partidos de oposición (especialmente el PAN y el Partido de la Revolución Democrática) habían impulsado la creación de una autoridad de carácter nacional y una legislación única para las elecciones federales y locales, argumentando que con ello se evitarían los enclaves autoritarios y se ahorrarían importantes recursos (Flores y Faustino, 2014: 141-143). Sin embargo, fue hasta 2014 cuando se atendieron en parte estas demandas. Este año se creó el Instituto Nacional Electoral en sustitución del IFE, además de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), para normar sus facultades. En materia de financiamiento de los partidos políticos, con esta reforma se homologaron las fórmulas para determinar el monto de financiamiento público de los partidos políticos y su forma de distribución en todas las entidades del país a partir de lo dispuesto para el plano federal.

Hasta 2014 las 32 entidades federales de la república tenían libertad para decidir la fórmula de financiamiento público local de los partidos políticos. Algunas entidades asignaban montos superiores al federal (como Nayarit, en donde se multiplicaba el padrón electoral por el 88% del salario mínimo), mientras que otras asignaban montos menores (como Veracruz, en donde se multiplicaba el padrón por el 20% del salario mínimo). No obstante, la suma total de financiamiento para partidos en las entidades federativas hasta 2014 representaba un monto menor al otorgado después de esta fecha. Así, el total de recursos entregados a los partidos, considerando el nivel federal y local, aumentó en 28% entre 2009 y 2015 (años con elecciones federales intermedias) y en 15% entre 2012 y 2018 (años de elección presidencial) (Astudillo, 2014: 32-34; Casar y Ugalde, 2018: 46).

Finalmente, la última reforma en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de febrero de 2022, permite a los partidos políticos renunciar y reintegrar de forma inmediata su financiamiento ordinario ante una emergencia nacional, sin necesidad de esperar a que termine la fiscalización anual. El objetivo es agilizar la devolución de los recursos públicos y su utilización para atender emergencias nacionales, evitándose las

confusiones y dificultades que tuvieron lugar en años previos, cuando algunos partidos pretendieron donar sus recursos para la reconstrucción post-sismos de 2019 y para afrontar la emergencia sanitaria de 2020 (COVID-2019).

Las iniciativas de reforma constitucional para reducir el financiamiento público de los partidos políticos

Una vez que morena llega al poder, en 2018, comienza a promover la reducción del financiamiento público de los partidos políticos. De septiembre de 2018 a diciembre de 2019 se presentaron 21 iniciativas de reforma constitucional para modificar la fórmula de cálculo de financiamiento público para los partidos políticos en el sentido señalado (13 en la cámara de diputados y 8 en el senado) (Patiño, et. al., 2020). Con base en las iniciativas presentadas la comisión de asuntos constitucionales de la cámara de diputados aprobó una minuta de reforma para reducir a la mitad el financiamiento público de los partidos políticos. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2019 esta propuesta fue rechazada en la votación del pleno de la Cámara de diputados al no alcanzar la mayoría calificada de votos necesaria para reformas constitucionales (dos terceras partes). La iniciativa recibió 274 votos a favor: 249 de MORENA, 24 del PES y 1 del PT. Y 207 votos en contra: 76 del PAN, 45 del PRI, 30 del PT, 28 de MC, 13 del PVEM, 11 del PRD, 1 de MORENA y 1 de un diputado independiente.

No obstante, este fracaso legislativo no detuvo la intención de reducir el financiamiento público de los partidos políticos. Al año siguiente, en medio de la crisis desatada a raíz de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) el partido MORENA renunció a la mitad de su financiamiento por actividades permanentes (de mayo a diciembre de 2023) para apoyar los esfuerzos gubernamentales en contra de la emergencia. El presidente López Obrador destacó públicamente la acción de MORENA y solicitó a los demás partidos seguir este ejemplo, aunque solo el PT y el PES se pronunciaron a favor. Los partidos PAN, PRD y MC rechazaron la idea señalando que se trata de acciones politiqueras y que si el gobierno requiere de recursos debería cancelar el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el tren maya. Por último, el PRI se mostró a favor, pero a condición de que se cree un fideicomiso administrado por personalidades de la sociedad civil y el INE. Al final, solo MORENA y el PT renunciaron a una parte de sus recursos. En septiembre de 2020 el

presidente AMLO de nueva cuenta solicitó a los partidos la renuncia a sus recursos. En esta ocasión pidió que renuncien a la mitad del dinero que recibirían con motivo de las campañas a desarrollarse en 2021, señalando que esos recursos servirían para la compra de vacunas anti-covid-19. Al mismo tiempo, MORENA anunció a través de spots televisivos que donaría la mitad de sus recursos para la compra de vacunas. No obstante, ningún otro partido siguió este ejemplo.

Por su parte, en el Congreso se siguieron presentando iniciativas en la materia. Desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2022 el partido MORENA presentó 14 iniciativas (9 por diputados de MORENA, 4 por senadores de MORENA y una del Presidente de la República). Además, los partidos de oposición presentaron 6 iniciativas. A final, la iniciativa impulsada por MORENA y presentada ante el pleno planteaba eliminar por completo el financiamiento público permanente de los partidos para dejar solo el electoral. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada al no lograr, de nueva cuenta, la mayoría calificada de votos (dos terceras partes). La iniciativa recibió 269 votos a favor: 198 de MORENA, 40 del PVEM y 31 del PT; y 225 en contra: 115 del PAN, 69 del PRI, 15 de MC, 15 del PRD y 1 de MORENA.

Los argumentos en relación a la reducción del financiamiento público de los partidos políticos en México

Los intentos de MORENA por reducir los recursos públicos entregados a los partidos políticos provocaron un debate en torno a su conveniencia. Quienes defienden la propuesta sostienen que los montos entregados son excesivos y que su abundancia ha redundado en el distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía (Sánchez, 2020). De tal suerte que, al recortarlos, se obligaría a estas organizaciones a acercarse a los ciudadanos, intentando recuperar su confianza, pues serían los encargados de su sostenimiento.

Sumado a esto, se aduce que la protección constitucional del financiamiento público de los partidos políticos no se justifica. Se cuestiona el hecho de que en un escenario catastrófico, de una grave caída en los ingresos nacionales, deba reducirse el gasto en rubros como la salud, educación o seguridad, mientras que los partidos políticos seguirán gozando

del mismo financiamiento gracias a que la fórmula para calcular sus ingresos se encuentra inscrita en la constitución (Batres, 2020).

Finalmente, se señala que con su reducción podría recuperarse la legitimidad de la clase política, pues se mandaría el mensaje de que los políticos se ajustan a la realidad de un país pobre. Sin mencionar que de este modo se generaría un ahorro para ser utilizado en otros sectores, como el de la salud o la educación pública (Ugalde, 2018).

En contraste, los defensores del financiamiento público para los partidos políticos arguyen que si bien sería posible e incluso deseable pensar en una reducción, ésta no debería comprometer la prevalencia de los recursos públicos sobre los privados –al menos no en el corto plazo–, ya que ello podría tener consecuencias negativas.

Una disminución sensible y drástica del financiamiento público para los partidos políticos afectaría sobre la equidad de la competencia electoral. Los partidos de oposición, y entre éstos especialmente los minoritarios, se verían más perjudicados que el partido en el poder y verían disminuida su capacidad para competir en las elecciones (De Hoyos, 2019; Nacif, 2019; Leyva et al, 2017). Como resultado, el carácter democrático del sistema de partidos podría deteriorarse.

Asimismo, se señala que en un país en donde la gran mayoría de los habitantes es pobre y un número aún mayor desconfía de los partidos, constituye un error pensar que sin recursos públicos serán los aportes masivos de sus militantes su fuente principal de ingresos (Merino, 2017). En realidad, lo más lógico es pensar que si se les “cierra demasiado la llave” los partidos tendrían que buscar recursos de “fuentes peligrosas” (Redacción, 2019). De tal suerte que los grandes donantes podrían adquirir una influencia política excesiva en la toma de decisiones. Los partidos buscarían congraciarse con sus patrocinadores, protegiendo sus intereses (intereses privados) a costa del interés público. Más aún, la necesidad de recursos podría incluso llevarlos a aceptar el cobijo de organizaciones criminales, en detrimento no solo de la democracia sino del Estado mismo.

La reducción del financiamiento público de los partidos políticos en perspectiva comparada

La experiencia internacional nos permite advertir empíricamente las implicaciones perjudiciales que puede traer consigo un recorte drástico de los recursos públicos partidistas.

En Bolivia, en el año 2008 se eliminó por completo el financiamiento público para los partidos políticos que había sido establecido en 1997 para la participación electoral y en 1999 para actividades permanentes (Flores, 2017: 68-70, 79). Como resultado, la equidad en la competencia electoral se deterioró, siendo uno de los elementos más cuestionados en los comicios generales inmediatos (2009 y 2014) (Romero, 2016: 324). La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por ejemplo, señaló que en la elección de 2014 la inexistencia de financiamiento público afectó “directamente las condiciones necesarias para permitir una contienda electoral equitativa y transparente” (OEA, 2014: 5).

La Ley de Organizaciones Políticas de 2018 reintrodujo por vía indirecta el financiamiento estatal de los partidos políticos, mediante la partida para el “fortalecimiento político”, la cual brinda subvenciones para el acceso a propaganda en medios de comunicación electrónicos e impresos, durante las elecciones, y para la formación y capacitación de sus líderes y militantes, en años no electorales (Flores-Díaz, 2020: 162-163). No obstante, este financiamiento es muy limitado y no resuelve el problema de inequidad. El informe de MOE de la OEA sobre las elecciones generales del año 2019 indica que el financiamiento público no cubre gastos esenciales, como el transporte, la publicidad en redes o la elaboración de spots, por lo que recomienda “considerar la implementación de financiamiento público directo” (OEA, 2019: 9-10).

En Italia se creó en 1974 un sistema de financiamiento público para los partidos políticos consistente en la entrega anual de fondos para los partidos representados en el parlamento y el reembolso de los gastos electorales. Este sistema surgió como respuesta a los escándalos de corrupción política registrados en años previos –de entre los que destacan los “generosos” fondos entregados por compañías petroleras a los partidos—. Sin embargo, a principios de los 90 la operación “Manos limpias” (Mani Pulite), que involucró a “6 ex primer ministros, a más de 600 miembros del parlamento y a miles de servidores públicos” en la entrega de sobornos por parte de empresas nacionales y extranjeras para hacerse de contratos gubernamentales (Vannucci, 2009: 233), llevó a la cancelación del sistema.

En 1993 se eliminó el fondo anual para los partidos en el parlamento, no obstante, el reembolso electoral siguió vigente y aumentó año con año, compensando la eliminación del primero (Pacini y Piccio, 2012: 7 y 8). No fue sino hasta 2014 cuando se elimina por completo este sistema, quedando en su lugar un financiamiento conocido como “dos por mil”, bajo el cual los ciudadanos pueden destinar el 0.2% de su contribución tributaria al partido político de su preferencia, sin ningún tope más allá del monto que paguen en impuestos al Estado. Así, entre más rico es un ciudadano más dinero puede destinar para apoyar a un partido sin que en términos reales afecte a su bolsillo, pues de cualquier modo debe pagar ese dinero al Estado.

Desde un punto de vista crítico Cagé señala que bajo el sistema de financiamiento de los partidos políticos en Italia los aportes privados son en realidad públicos, pues salen del monto que los particulares obligatoriamente debían entregar al Estado, con la perniciosa diferencia de que los partidos los reciben como apoyos de individuos específicos y no de la sociedad en su conjunto. De tal modo que aquellos individuos acaudalados que decidan aprovechar el “dos por mil” adquieren mayor influencia política que el resto, con cargo al presupuesto público (Cagé 2020: 52-54).

Por último, en Indonesia los partidos políticos comienzan a recibir subsidios indirectos (asistencia logística) por parte del Estado en 1999 y financiamiento público directo en 2001. Sin embargo, bajo la presión de grupos de la sociedad civil y otros actores –quienes alegaban que los “partidos no merecen el apoyo estatal dado su pobre desempeño” y que “Indonesia necesita gastar más en programas sociales” –, en 2005 se expide un decreto que reduce el apoyo del Estado en un 89 por ciento (Mietzner, 2016: 91). Desde entonces los partidos dependen básicamente de aportes privados, cuyos montos máximos para donantes individuales y empresas han aumentado.

Las consecuencias han sido las siguientes: 1) Los niveles de oligarquización de los partidos se incrementaron significativamente. En 2004 ningún presidente de los 10 partidos más grandes podía ser considerado un oligarca (esto es, un actor cuya fuente primaria de poder recae en la posesión de grandes sumas de dinero), empero, diez años después la mitad lo era. 2) Los partidos han incrementado las cuotas que los representantes populares y burócratas afiliados deben cubrir. En algunos casos han tenido que destinar su salario completo para el partido o han sido reemplazados por negarse. 3) La necesidad de fondos

que los políticos tradicionales ha tenido para poder competir con los “oligarcas” ha incrementado los niveles de corrupción. Legisladores y gobernantes han demandado sobornos a organizaciones empresariales y otros grupos de interés para tomar decisiones en su beneficio. 4) Para hacerse de fondos los partidos han puesto a la venta nominaciones en el poder judicial, banco central y otros órganos estatales. Y 5) Los partidos usan fondos públicos en su propio beneficio, canalizando los programas sociales hacia sus grupos de apoyo. Finalmente, debe señalarse que la corrupción política no es un fenómeno nuevo en Indonesia, sin embargo, desde la drástica reducción de los recursos públicos para los partidos ésta ha estado casi invariablemente ligada al financiamiento de estas organizaciones. Y si bien existe un catálogo de regulaciones y sanciones en la materia, las agencias de control han carecido de la capacidad y de los recursos para hacer cumplir la ley (Mietzner, 2016).

Conclusión

En este trabajo se estudió la propuesta de reducir el financiamiento público de los partidos políticos en México y el debate en torno a la misma. En síntesis, quienes defienden la propuesta de reducir el financiamiento público de los partidos políticos en México señalan que: a) el excesivo gasto público ha generado un distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía, b) no existe justificación para que los partidos sean los únicos entes públicos que tienen protegidos constitucionalmente sus recursos ante cualquier escenario, c) reducir los montos abonaría a la recuperación de la legitimidad de la clase política y d) con ello se generaría un ahorro para el Estado. Por su parte, sus críticos sostienen que: a) una disminución sensible y drástica de los recursos provenientes del Estado perjudicaría notablemente a los partidos de oposición, en detrimento de la equidad en las contiendas electorales, b) la falta de recursos llevaría a los partidos a buscar el apoyo de grandes donantes, adquiriendo éstos una influencia política por encima de ciudadano común, y c) las organizaciones criminales podrían inmiscuirse en los partidos gracias a su capacidad económica.

Aunado a esto, la experiencia internacional muestra que aquellos países que han eliminado su sistema de financiamiento público para los partidos políticos han tenido consecuencias indeseables. En Bolivia se afectó la equidad de los procesos electorales, en

Italia los grandes donantes adquirieron mayor influencia con cargo a las arcas del Estado y en Indonesia crecieron los niveles de oligarquización y corrupción.

Dados los ejemplos y argumentos presentados, resulta plausible sostener que una reforma al modelo de financiamiento de los partidos políticos en México no debería comprometer el principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los privados, ya que los problemas que esto podría acarrear –mayor influencia de intereses privados (incluso criminales) en la política, inequidad, corrupción, etc.– superan a las ventajas –ahorro de recursos públicos–. En suma, lo barato puede salir muy caro.

Fuentes

Astudillo, César (2014). “Con la cuchara grande”. Voz y voto, junio, núm. 256: 31-34.

Batres, Martí. 2020. “Bajar el presupuesto de los partidos”. El Financiero. 7 de septiembre. Disponible en: <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/bajar-el-presupuesto-de-los-partidos/>

Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldenberg. 1997. La reforma electoral de 1996. Una descripción general. México: FCE.

Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldenberg. 2005. La mecánica del cambio político en México. México: Cal y Arena.

Brinegar, Adam, Scott Morgenstern and Daniel Nielson. 2006. “The PRI’s Choice: Balancing Democratic Reform and its Own Salvation”, Party Politics. January, vol. 12, 1. United States: Sage

Cagé, Julia. 2020. The Price of Democracy. How Money Shapes Politics and What to Do About It. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Casar, María y Luis Ugalde. 2019. Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. México: Grijalbo.

De Hoyos, Gustavo. 2019. “Reducción presupuestaria a los partidos políticos”. El Economista. 4 de noviembre. Disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reduccion-presupuestaria-a-los-partidos-politicos-20191103-0092.html>

Flores, Jorge y Antonio Faustino. 2014. “Los órganos electorales estatales y la reforma política de 2013”. En: Apuntes Electorales, año XIII, núm. 50, enero-junio. México: IEEM

Flores-Díaz, Jorge. 2020. “The Legal Regulation of Political Parties in Latin America: Public Funding and Internal Democracy”. *Comparative Law Review*. Vol. 26. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.12775/CLR.2020.006>

Ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales, 28 de Diciembre de 1977

Ley federal electoral, 5 de Enero de 1973

Leyva, Oswaldo, et. al. 2017. “Financiamiento público y supervivencia de partidos políticos minoritarios en México”. *Análisis Político*. Núm. 91, septiembre-diciembre: 110-129.

Merino, Mauricio 2017. “La clase política se equivoca”. *El Universal*. 25 de septiembre. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-merino/nacion/la-clase-politica-se-equivoca>

Mietzner, Marcus. 2016. Indonesia. En: Norris, Pippa y Andrea van Es, Eds. *Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspective*. United States of America: Oxford University Press.

Murayama, Ciro. 2008. “Financiamiento a los partidos políticos: el nuevo modelo mexicano. En: Córdova y Salazar (Coords.). *Estudios sobre la reforma electoral 2007. Hacia un nuevo modelo*. México: TEPJF

Nacif, Benito 2019. “Por qué es necesario el financiamiento público a partidos”. *El Universal*. 12 de agosto. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/benito-nacif-hernandez/por-que-es-necesario-el-financiamiento-publico-partidos>

OEA. 2014. Informe verbal. Misión de Observación Electoral Estado Plurinacional de Bolivia. Elecciones Generales del 12 de octubre de 2014. https://www.oas.org/es/sap/deco/moe_informe/informe_verbal_bolivia2014.pdf

OEA. 2019. RECOMENDACIONES DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA EN BOLIVIA. Disponible en: <http://www.oas.org/documents/spa/press/Recomendaciones-MOE-Bolivia-2019.pdf>

Pacini, Chiara Maria y Daniela Romee Piccio. 2012. *Party Regulation in Italy and its effects*. Paper prepared for the VI Annual Congress of the Portuguese Political Science Association, Lisbon, 1-March.

Peschard, Jacqueline. 2008. El federalismo electoral en México. México: Miguel Ángel Porrúa.

Redacción. 2019. “Reducir financiamiento podría llevar a los partidos políticos a buscar dinero ilícito, advierte INE”. Sin Embargo. 7 de agosto. Disponible en: <https://www.noroeste.com.mx/nacional/reducir-financiamiento-podria-llevar-a-los-partidos-politicos-a-buscar-dinero-ilicito-advier-te-el-ine-DUNO1170939>

Romero, Salvador. 2016. “El Sistema de partidos en Bolivia (1952-2015): del partido hegemónico al partido predominante”. En: Freidenberg, Flavia Ed. Los sistemas de partidos en América Latina 1978-2015. Tomo 2. México: IJ

Sánchez, Karla. 2020. “Sin partidos políticos no hay democracia. Entrevista a Joy Langston”. Letras Libres. 1 de noviembre. Disponible en: <https://www.letraslibres.com/mexico/revista/sin-partidos-politicos-no-hay-democracia-entrevista-joy-langston>

Ugalde, Luis. 2018. “¿Se debe reducir el financiamiento de los partidos políticos?”. Animal político. 30 de Julio. Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/se-puede-reducir-el-financiamiento-de-los-partidos-politicos/>

Vannucci, Alberto. 2009. The Controversial Legacy of ‘Mani Pulite’: A Critical Analysis of Italian Corruption and Anti-Corruption Policies. Bulletin of Italian Politics. Vol. 1, No. 2: 233-64

Zermeño, Sergio. 2010. México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68. México: Siglo XXI.